

Septiembre 10 de 1959

39ª REUNION — 32ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JOSE MARIA GUIDO, presidente provisional del Honorable
Senado, y del senador BARTOLOME PEREZ, presidente de la Comisión
de Legislación General

Prosecretario: señor NOE JITRIK

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro
BAYOL, Augusto G.
BERTIN, Alfredo Felipe
BERTORA, José María Antonio
BIAIN, Pablo
CALDERON Segundo Rosa
CANEQUE Francisco E.
CIARLOTTI, Pedro Antonio
DE LLAMAS, Enrique V.
DIAZ, Juan Luis
FALCO, Clodomiro
FIGUEROA, Héctor E.
FITTIPALDI, Juan Pablo
GALLO, Victorio Manuel
GARCIA, Alfredo
GOMEZ, Carlos Bernabé
GUIDO, José María
GUZMAN, Benjamín
ITURRALDE, Antonio
JARITONSKY, José
LEBRERO, Carlos Alberto
MALLEVILLE, Julio A.
MELANI, Francisco José
NOGUEIRA, Eduardo
PARRA PEREZ, Diego
PEREZ, Bartolomé
RACEDO, Lucio E.
RICA, Diego Isidro
ROCHA ERRECART, Adolfo
TRUNSKY, Salomón

TURANO, Armando Luis
VERA BARROS, Pedro César
VILCHEZ, Martín
VILLALBA, Lucas

AUSENTES, CON AVISO:

BAZAN, Eduardo
DAVILA, J. Anibal
FLEITAS, Victor Hugo
JUAREZ, José Gregorio
LEAVY, Napoleón Tomás
MANSILLA, Juan Argentino
SANCHEZ, Franklin Alberto
WEIDMANN, Rodolfo A.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 1122.)
- 2.—Asuntos entrados:
Despachos de comisiones. (Página 1122.)
- 3.—Proyecto de ley de los senadores Lebrero, Fittipaldi y Figueroa por el que se declara de interés nacional la enseñanza de los principios de la salud en toda la República. (Página 1123.)
- 4.—Proyecto de comunicación del senador Bayol sobre provisión de casas habitaciones a personal militar del destacamento de Gendarmería en Río Turbio. Santa Cruz. (Página 1123.)
- 5.—Proyecto de ley del senador Gallo sobre creación de una escuela agropecuaria en Capayán, Catamarca. (Página 1124.)

- 6.—Solicitud del senador Vilchez en el sentido de que se resuelva cuáles son las atribuciones del Honorable Senado con respecto a lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución Nacional. (Página 1124.)
- 7.—Proyecto de ley del senador Trunsky por el que se acuerda pensión a Milagro Fanny Mollinedo Gurruchaga de Linares. (Página 1125.)
- 8.—Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. (Página 1125.)
- 9.—El senador Bayol solicita informes sobre el estado en que se encuentra la tramitación de una denuncia formulada por un ex funcionario de Yacimientos Carboníferos Fiscales. (Página 1128.)
- 10.—A moción del senador Bayol se resuelve tratar sobre tablas el proyecto de comunicación a que se refiere el punto 4 de este sumario. (Página 1128.)
- 11.—Consideración del proyecto de comunicación a que se refiere el punto 4 de este sumario. Se aprueba. (Página 1128.)
- 12.—A moción del senador Melani se fija el plan de labor de la Cámara para esta sesión. (Página 1129.)
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la representación diplomática de la República en el Reino de Jordania. Se aprueba. (Página 1129.)
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el pedido de subsidio formulado por la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, de la ciudad de Tucumán. Se aprueba. (Página 1131.)
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del senador Sánchez sobre construcción de un edificio para la Escuela Profesional Nacional de Mujeres de la provincia de San Juan. Se aprueba. (Página 1132.)
- 16.—Consideración del despacho de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del senador Díaz sobre creación de bibliotecas en varias localidades de la provincia de Formosa. Se aprueba. (Página 1138.)
- 17.—Consideración del despacho de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del senador Villalba sobre confirmación de personal de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que desempeña una función superior a la del cuadro en que revista. Se aprueba. (Página 1137.)
- 18.—A moción del senador Melani se resuelve pasar a cuarto intermedio. (Página 1138.)
- 19.—Continúa la sesión. A moción del senador Melani se resuelve que la Cámara se constituya en comisión para estudiar el proyecto de ley, en revisión, sobre régimen para la producción y comercialización de vinos. (Página 1138.)

20.—Conferencia. La Cámara, constituida en comisión, estudia el proyecto de ley, en revisión, a que se refiere el punto anterior. A indicación del senador Melani se resuelve cerrar la conferencia y proseguir con la misma en la próxima sesión ordinaria. (Página 1138.)

21.—A moción del senador Guldo se resuelve levantar la sesión. (Página 1151.)

22.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 1152.)

—En Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1959, a la hora 16 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Vilchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Vilchez. — Hago indicación para que se continúe llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guido). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—A la hora 20 y 35, dice el

Sr. Presidente (Guido). — La sesión está abierta.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Despachos de comisiones

Sr. Prosecretario (Jitrik). — La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha producido despacho: en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se cede a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la obra escultórica *José Hernández*; en el proyecto de ley, en revisión, acordando un subsidio a la Asociación Sinfónica de la ciudad de Rosario; en el proyecto de ley, en revisión, modificando la ley de impuesto para aprendizaje, y en el proyecto de ley del señor senador Dávila autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 1.000.000 para subsidiar a la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.

Sr. Presidente (Guido). — Al orden del día.

Sr. Prosecretario (Jitrik). — La Comisión de Trabajo y Previsión Social ha producido despacho en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aumenta a la suma de \$ 1.500 el haber básico mínimo establecido por la ley 11.412 y sus modificatorias, y en el proyecto de ley del

Por otra parte, considero oportuno, y además de estricta justicia, que la situación de aquellas personas a quienes la superioridad haya promovido a situaciones de mejoras dentro del régimen escalafonario consoliden su situación luego de un año de haber estado desempeñándose en tales tareas.

Se consultan de este modo elementales principios del derecho laboral y se permite que las mejoras logradas, la mayor parte de las veces por el mérito de los propios beneficiarios, queden definitivamente consolidadas.

Es en razón de ello que presento a la consideración de mis colegas este proyecto de ley.

Lucas Villalba.

—Ocupa la Presidencia el presidente de la Comisión de Legislación General, senador Bartolomé Pérez.

Sr. Presidente (Pérez). — En consideración.

Sr. Villalba. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Villalba. — El año pasado el Parlamento nacional sancionó la ley 14.517, por la cual se estableció la escala de sueldos para el personal de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. En virtud de las disposiciones de la misma, dicho personal fue clasificado en distintas categorías, con una retribución variable según su antigüedad y una bonificación que contemplaba un incremento retributivo de acuerdo con la categoría en que revistaba el dependiente.

No hay que olvidarse que a un año de la sanción de aquella ley la escala de sueldos que quedara establecida en virtud de las disposiciones de la misma no consulta las consecuencias del alza del costo de la vida y obliga, por consiguiente, a realizar una actualización de la misma. Entiendo que nadie podría hacerlo en más ajustada medida que el propio Poder Ejecutivo, a quien, en definitiva, queda librada en lo sucesivo la facultad de modificar las escalas respectivas de sueldos.

Con estas breves razones dejo fundamentado el despacho de la comisión y solicito de mis honorables colegas se sirvan prestar apoyo al mismo.

Sr. Presidente (Pérez). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Pérez). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se hará la comunicación correspondiente a la Honorable Cámara de Diputados.

18

MOCION DE CUARTO INTERMEDIO

Sr. Melani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Melani. — Señor presidente: hago moción para pasar a cuarto intermedio por el término de una hora.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Pérez). — En consideración la moción formulada. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pérez). — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio por el término propuesto.

—Es la hora 21 y 45.

—A la hora 23 y 40, dice el

Sr. Presidente (Pérez). — Continúa la sesión.

19

MOCION

Sr. Presidente (Pérez). — Corresponde considerar el proyecto de ley, en revisión, sobre régimen de vinos, el cual no tiene despacho de comisión.

Sr. Melani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Melani. — Solicito que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de considerar este proyecto y que se confirme a las autoridades de la misma para presidir la conferencia.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Pérez). — Se va a votar la moción que ha formulado el señor senador por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pérez). — Se procederá en consecuencia.

20

CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pérez). — Queda abierta la conferencia y confirmadas las autoridades del cuerpo. Por Secretaría se va a dar lectura al proyecto de ley venido en revisión.

Sr. Prosecretario (Jitrik). — (*Leyendo*):

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La industria vitivinícola y el comercio relacionado con ella en todo el territorio de la Nación quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley general de vinos y de su reglamentación.

Art. 2º — Créase, sobre la base de la actual Dirección de Vinos y otras Bebidas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía, con autarquía técnica, funcional y financiera, y jurisdicción en todo el territorio de la Nación, como organismo com-

petente para entender en la promoción y el contralor técnico de la industria y el comercio vitivinícolas.

Art. 3º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura será una institución de derecho público, con capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes generales de la Nación y las especiales y los reglamentos que lo rijan.

Art. 4º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura estará constituido:

- a) Por un presidente y un vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Deberán ser argentinos y poseer notoria versación en los problemas vitivinícolas. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos. Ambos cargos serán rentados e incompatibles con el ejercicio de toda otra función pública o docente y de actividades privadas relacionadas con la industria y/o comercio del vino y demás productos incluidos en la presente ley;
- b) Por un consejo directivo integrado en la siguiente forma:

Un representante del Poder Ejecutivo nacional.

Dos representantes por el gobierno de la provincia de Mendoza.

Dos representantes por el gobierno de la provincia de San Juan.

Un representante por los gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Un representante por los gobiernos de las restantes provincias vitivinícolas.

Un representante por los industriales del vino.

Un representante por los viñateros sin bodega.

Un representante por los comerciantes distribuidores.

Un representante por los obreros vitivinícolas.

Los miembros del consejo directivo serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación en la siguiente forma:

- a) El representante del Poder Ejecutivo de la Nación deberá ser funcionario nacional y profesional especializado en asuntos económicos;
- b) Los representantes de los gobiernos provinciales serán designados a propuesta de sus respectivos gobiernos y deberán poseer notoria versación en los problemas vitivinícolas;
- c) Los restantes representantes serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta directa de las entidades gremiales más representativas.

Cuando las propuestas correspondientes a las designaciones de los miembros del consejo directivo no hubiesen sido efectuadas, los mismos serán designados directamente por el Poder Ejecutivo nacional, respetando las bases de representación.

Los miembros del consejo durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Los consejeros percibirán por el ejercicio de sus funciones las remuneraciones o viáticos que oportunamente determine el Poder Ejecutivo nacional.

Simultáneamente con la designación de los titulares y por los mismos procedimientos e idénticos requisitos, el Poder Ejecutivo nacional designará un suplente para cada una de las representaciones, quienes sustituirán al titular en los casos que determine la reglamentación.

Art. 5º — El consejo directivo sesionará con la mitad más uno de sus miembros. A los efectos del quórum se computará al presidente del instituto. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá voto solamente en caso de empate.

Art. 6º — La sede oficial del instituto estará en la provincia de Mendoza.

Art. 7º — Son funciones del presidente:

1. Representar legalmente al instituto.
2. Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas reglamentarias y todas las resoluciones que sancione el consejo directivo.
3. Proponer al consejo directivo las medidas y la designación del personal que estime necesarios para el mejor funcionamiento del instituto.
4. Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo delegar esta facultad en los casos en que la reglamentación lo determine.
5. Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para llevar a cabo las resoluciones de orden general o particular que tome el consejo directivo, siendo necesario para su convalidación que estén refrendados con la firma de otro integrante del mismo.
6. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional el presupuesto y la memoria del instituto, previa aprobación del consejo directivo. Mientras no se apruebe el nuevo presupuesto, continuará vigente el del año anterior.

Art. 8º — El vicepresidente del instituto será técnico en materia vitivinícola, preferentemente ingeniero agrónomo o enólogo, y tendrá la jerarquía y funciones de director general del organismo.

Son funciones del vicepresidente:

1. Reemplazar en caso de ausencia o enfermedad al presidente, con idénticas facultades.
2. Asistir a las reuniones del consejo directivo, en las que tendrá voz pero no voto.

Art. 9º — Son funciones del consejo directivo:

- a) Interpretar la presente ley;
- b) Proyectar su reglamentación;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto del instituto;
- d) Establecer las normas de organización del instituto;
- e) Adoptar las medidas adecuadas para el mejor desarrollo y perfeccionamiento de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas;
- f) Adoptar las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos comprendidos en la presente ley;
- g) Realizar investigaciones vitivinícolas y coordinar y fomentar las de entidades oficiales y privadas, pudiendo acordar a estas últimas contribuciones para tales fines;
- h) Nombrar, trasladar, promover y remover a su personal, respetando las normas que garantizan la estabilidad y los derechos de los empleados públicos. Será indispensable para ejercer el cargo de inspector, ser argentino y poseer título habilitante de acuerdo con la reglamentación que se dicte. El cargo de inspector será incompatible con el ejercicio de actividades vinculadas a la industria o el comercio del vino;

- i) Resolver la adquisición de inmuebles y celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
- j) Administrar los bienes del instituto dentro de las facultades que le acuerda la presente ley y autorizar los gastos y efectuar las recaudaciones previstas en su presupuesto;
- k) Disponer la aplicación de los saldos sobrantes de presupuesto al cierre del ejercicio y, en especial, la constitución de fondos de reserva para la construcción de edificios (sede administrativa, laboratorios, etcétera);
- l) Celebrar convenios con los Estados provinciales, municipalidades u otros organismos públicos a fin de coordinar la acción a desarrollar;
- m) Otorgar becas para estudio y especialización;
- n) Ninguna resolución del consejo directivo podrá conservar, establecer o crear privilegios de una o más zonas respecto de otras.

Art. 10. — El Instituto Nacional de Vitivinicultura atenderá los gastos que demande su funcionamiento con los siguientes recursos:

- a) Veinte centavos (\$ 0,20) por litro de vino expedido, que se establece con carácter de sobretasa a los fines de la presente ley. A dicha sobretasa le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino, y será percibida juntamente con él;
- b) El producto de las sobretasas establecidas en el artículo 85 de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956, que en el futuro se destinará a los fines de la presente ley;
- c) Las tasas por análisis;
- d) Las multas que se apliquen por transgresión a la presente ley y su reglamentación;
- e) Donaciones y legados;
- f) Venta eventual de productos;
- g) Las partidas que asigne el Poder Ejecutivo de rentas generales, cuando fueren insuficientes para completar el presupuesto las partidas anteriormente establecidas.

Art. 11. — Con una afectación no inferior al 10 % de los recursos anuales, será creado un fondo destinado al fomento de la vitivinicultura y la construcción por el régimen de la licitación pública de bodegas regionales y habilitación de las mismas, cuyas finalidades serán determinadas por el consejo directivo en función del acrecentamiento y mejoramiento de la calidad de los vinos de consumo.

Adquirirá patentes de procedimientos y maquinarias que pondrá a disposición de los industriales y de los talleres metalúrgicos de las zonas vitivinícolas para modernizar y mejorar la producción.

Art. 12. — La sobretasa y las multas a que se refiere el artículo 10, incisos a) y d) de la presente ley, serán recaudadas por la Dirección General Impositiva e ingresadas a la orden del consejo directivo en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 13. — El consejo directivo podrá asignar subsidios a las provincias vitivinícolas, universidades nacionales, escuelas o institutos especiales de estudios técnicos vitivinícolas, con fines de investigación y con cargo de rendir cuenta detallada de la inversión, y a condición de haberse acogido al régimen de coordinación de la investigación científica, que se establecerá por el consejo directivo.

Art. 14. — Los saldos sobrantes al final del ejercicio se transferirán al siguiente y su aplicación será dispuesta por el consejo directivo, de acuerdo con las facultades que le otorga la presente ley.

Art. 15. — Los productos a que se refiere esta ley no podrán librarse a la circulación sin el previo análisis que establezca su aptitud para el consumo, al que deberán responder en todo momento, con las tolerancias que provengan de su evolución natural, y sin aquellos requisitos que la reglamentación de la presente ley disponga para su mejor identificación. El número del certificado de análisis que les corresponda deberá acompañarlos siempre como elementos de identificación.

Art. 16. — Los análisis a que se refiere el artículo anterior y todos los que deban practicarse en virtud de esta ley o sus reglamentos, así como la clasificación legal de los productos, los practicará el instituto. A tal efecto la Dirección Nacional de Química transferirá todo el personal y los elementos afectados a este servicio a la fecha de promulgación de la presente ley, como también todo aumento que ocurriera antes de la transferencia.

Hasta tanto el instituto tenga organizados sus propios laboratorios (en base a las previsiones de este artículo), la Dirección Nacional de Química cumplirá con su cometido de acuerdo con las normas vigentes.

Art. 17. — Las características analíticas de los productos de la presente ley, los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, los análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles y sus normas interpretativas se ajustarán a la reglamentación que dicte el instituto.

Art. 18. — A los efectos de la presente ley, se considerará:

- a) Vinos genuinos, a los obtenidos por la fermentación alcohólica parcial o total de la uva fresca o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de producción. En consecuencia, ningún otro líquido, cualquiera sea su origen o composición, podrá designarse con el nombre de vino, precedido o seguido de cualquier adjetivo, excepto los especificados más adelante;
- b) Vinos especiales (licorosos y/o generosos):
 1. Categoría A: Es el vino seco o dulce que, sin adiciones, posee un grado alcohólico no inferior a doce y medio por ciento (12½ %) en volumen y/o una riqueza alcohólica adquirida y en potencia no menor de quince grados (15°GL).
 2. Categoría B: Es el vino seco o dulce cuya graduación alcohólica no sea inferior a quince por ciento en volumen (15 %) y provenga, en parte, de la adición de alcohol vínico en cualquier momento de su elaboración.
 3. Categoría C: Es el vino obtenido adicionando en cualquier momento de su proceso de elaboración indistinta, conjunta o separadamente cualquiera de los siguientes productos: mosto concentrado, mistela, arropé, caramelo de uva o alcohol vínico con una riqueza alcohólica total no inferior a quince grados (15 % GL);
- c) Vinos espumosos, champaña o champagne, el que se expende en botellas con una presión no inferior a cuatro atmósferas (4 atm.) a veinte

- grados centígrados (20°C) y cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica en envase cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por medio del azúcar natural de la uva o por la adición de sacarosa. Se permitirá la adición de licores a base exclusivamente de vino con cognac o aguardiente vínico;
- d) Vino gasificado, el que ha sido adicionado de anhídrido carbónico puro después de su elaboración definitiva, debiendo hacerse constar dicha denominación en los marbetes adheridos a los envases de venta;
- e) Vino compuesto (vermute, quinado o tónico), el elaborado con base mínima de setenta y cinco por ciento (75 %) de vino alcoholizado o no con el agregado de sustancias aromáticas, amargas y/o estimulantes; pudiendo edulcorarse con sacarosa o mosto concentrado o mistela y colorearse con caramelo. En la elaboración de los quinados deberán utilizarse extractivos de corteza de quina;
- f) Productos analcohólicos de la uva, son:
1. Jugo de uva, el producto de la molienda o prensado de la uva fresca, filtrado y estabilizado antes de iniciarse el proceso de fermentación alcohólica. Se tolerará alcohol proveniente de fermentaciones accidentales, con un límite máximo de uno por ciento (1 %) en volumen.
 2. Mosto virgen de uva, el proveniente de la molienda o prensado de la uva fresca en tanto no haya empezado a fermentar.
 3. Mosto de uva en fermentación, aquel en proceso de fermentación, cuya riqueza alcohólica no exceda de cinco por ciento (5 %) en volumen.
 4. Mosto sulfitado, el mosto estabilizado con el agregado de anhídrido sulfuroso en dosis que establezca la reglamentación.
 5. Mosto concentrado, el obtenido del mosto de la uva en sus diversos grados de concentración mediante procesos térmicos, al vacío o al aire libre, sin haber sufrido caramelización sensible.
 6. Arrope de uva, el producto resultante de la concentración avanzada de mostos de uvas, a fuego directo o al vapor, sensiblemente caramelizado con un contenido mínimo de quinientos (500) gramos de azúcar por litro.
 7. Caramelo de uva, un arrope de uva con mayor grado de caramelización y un contenido de azúcar no mayor de doscientos (200) gramos por litro.
- g) Chicha de uva, el producto que resulta de la fermentación parcial del mosto detenida antes de alcanzar cinco por ciento (5 %) de alcohol en volumen y con un contenido mínimo de ochenta (80) gramos por litro de azúcar reductor. Queda prohibida la elaboración de chicha a base de mosto concentrado;
- h) Mistela, el producto que contenga como base mosto alcoholizado con alcohol vínico hasta un límite máximo de dieciocho por ciento (18 %) de alcohol en volumen. El mosto utilizado deberá poseer directamente o previa concentración o por adición de mosto concentrado un contenido azucarino mínimo de doscientos cincuenta (250) gramos por litro;
- i) Aguardiente de vino, pisco o brandy, el producto de la destilación especial de vino sano, cuya graduación alcohólica al salir del destilador no sea superior a setenta y cinco por ciento (75 %) en volumen de acuerdo con la reglamentación que dicte el instituto;
- j) Cognac o coñac, el aguardiente de vino añejado en envases de roble por un término no inferior a dos años. Este lapso podrá computarse promediando el estacionamiento de partidas de distintas edades, ninguna menor de un año. Podrá autorizarse con carácter general el uso de envases de otras maderas de aptitud probada;
- k) Grapa, grappa o aguardiente de orujos, el aguardiente obtenido por destilación de los orujos;
- l) Alcohol vínico, el que se obtiene por destilación y rectificación de vinos, productos o subproductos derivados de la fermentación de la uva;
- m) Los productos o subproductos derivados de la industria vitivinícola no definidos en el presente artículo deberán ser aprobados previamente por el consejo directivo, previos los informes técnicos pertinentes;
- n) Todas las bebidas que presenten características similares a las definidas, pero que han sido obtenidas por procedimientos distintos a los enumerados en la presente serán calificadas como bebidas artificiales.
- Art. 19.—Se admitirán como prácticas enológicas lícitas:
- a) Para los mostos: la concentración; la adición del mosto concentrado; de alcohol vínico; de ácidos tartárico, cítrico, málico, tánico y anhídrido sulfuroso o sus sales; el uso de calor o frío; el empleo de levaduras seleccionadas, de clarificantes autorizados, y el corte con vinos;
- b) Para los vinos:
1. La adición de ácidos tartárico, cítrico, málico, tánico, anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso y sus sales; tartrato neutro de potasio; el uso de calor o frío y el empleo de levaduras seleccionadas.
 2. La mezcla de dos o más vinos provenientes de cualquier cosecha.
 3. La alcoholización con alcohol vínico limitada para asegurar la conservación o la preparación de vinos especiales.
 4. El empleo de clarificantes autorizados.
- Los productos de uso enológico autorizados y los que se autorizaren más adelante deberán estar identificados por sus análisis de aptitud. Asimismo, la producción y el consumo de los referidos productos estarán sometidos al contralor del instituto.
- Art. 20.—Queda prohibido:
- a) La adición de agua al mosto o vino en cualquier cantidad, forma o momento, el agregado de materias colorantes y ácidos minerales y edulcorantes no provenientes de la uva, materias conservadoras y en general sustancias no autorizadas específicamente;
- b) Todos los manipuleos y prácticas que tengan por objeto modificar las cualidades substancia-

les y originales del producto, con la finalidad de disimular una alteración del mismo;

- c) El agregado a los orujos y borras, de agua y cualquier otra substancia tendiente a alterar el proceso normal de la elaboración vinica;
- d) Mantener en depósito en los locales de elaboración o fraccionamiento productos no autorizados, que sirvan para modificar el estado o la composición natural del vino;
- e) La importación, fabricación, tenencia, anuncio, exposición, oferta o venta de cualquier producto o mezcla enológica, cualquiera sea su composición, destinada a modificar o aromatizar mostos o vinos, a curar o encubrir sus defectos o enfermedades o a fabricar vinos artificialmente;
- f) Introducir, mantener en depósito, circular u ofrecer en venta como vino, toda bebida que no llene las condiciones exigidas por esta ley y su reglamentación;
- g) Librar al consumo vinos cuya composición no esté comprendida en los límites que fije la reglamentación.

Art. 21. — A propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura el Poder Ejecutivo podrá suprimir, modificar o ampliar las correcciones o prácticas enológicas permitidas y establecer los límites legales de los componentes del vino.

Art. 22. — Los productos comprendidos en la presente ley que se importen, deberán poseer certificados que acrediten su genuinidad, extendidos por oficinas del país de origen reconocidas por el Poder Ejecutivo. Su introducción estará sujeta a las mismas condiciones exigidas para la libre circulación de los vinos nacionales. Queda prohibida la mezcla de productos importados entre sí y con vinos nacionales.

Art. 23. — Las calificaciones legales de los productos definidos en la presente ley que no llenaran las condiciones exigidas, serán las siguientes:

- a) «No genuinos», aquellos cuya elaboración haya sido hecha en contravención con las normas legales y reglamentarias o cuya composición anormal no pueda ser justificada;
- b) «Adulterados», aquellos a los que se les haya agregado productos extraños a su composición natural o cuando se hayan obtenido por adición de sustancias prohibidas o mezclas no autorizadas;
- c) «Averiadados», aquellos que por sus caracteres organolépticos demuestren una alteración excesivamente pronunciada o acusen exceso de acidez volátil sobre el máximo que establezca la reglamentación;
- d) «Con principio de enfermedad», aquellos que presenten gérmenes de enfermedad en actividad, pero cuya acción pueda paralizarse o hacerse desaparecer mediante tratamiento permitido y acusen una acidez volátil inferior a la máxima establecida por la reglamentación;
- e) «Aguados y/o manipulados», aquellos a los que en cualquier momento de su elaboración o depósito se les ha adicionado agua u otras sustancias que, aun siendo normales en los vinos, alteran su composición o desequilibran la relación normal de sus componentes. Ningún producto calificado de acuerdo a la denominación precedente podrá ser librado al consumo.

Los productos «adulterados», «no genuinos», y «aguados o manipulados», deberán ser derramados o destilados; los «averiadados», y «enfermos», podrán destinarse a elaboración de vinagre, cuando sean aptos para ello, o destilados de acuerdo con lo que disponga la reglamentación de la ley.

Los productos «con principio de enfermedad», podrán corregirse con intervención del instituto cuando pueda hacerse desaparecer la causa de la enfermedad, y podrán librarse al consumo, previo un nuevo análisis que certifique su aptitud.

Art. 24. — Las infracciones a la presente ley, o a su reglamentación, y las disposiciones que en su consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán reprimidas:

- a) Las faltas leves, tratándose de su primera infracción, con apercibimiento;
- b) Las faltas vinculadas a cuestiones de mero trámite, o de carácter formal, con multas de \$ 200 a \$ 5.000 moneda nacional;
- c) La tenencia no autorizada en los locales de elaboración, corte o fraccionamiento, de sustancias o drogas prohibidas que pudieran utilizarse en la adulteración de los productos comprendidos en la presente ley, con multa de diez mil a dos millones de pesos (\$ 10.000 a 2.000.000);
- d) La elaboración, tenencia o circulación de productos «no genuinos», con multa de cuatro pesos por litro;
- e) El expendio o la circulación no denunciada de productos «con principio de enfermedad», con multas de cincuenta centavos (\$ 0.50) por litro;
- f) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «averiadados», con multa de dos pesos (\$ 2.—) por litro, salvo el caso de denuncia espontánea;
- g) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «adulterados», con multas de diez mil a dos millones de pesos (\$ 10.000 a 2.000.000), y tres a diez pesos (\$ 3.— a 10.—) por litro;
- h) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «aguados, o «manipulados», con multas de diez mil a un millón de pesos (\$ 10.000 a 1.000.000) y dos a ocho pesos (\$ 2.— a 8.—) por litro;
- i) Cuando no se pueda determinar el volumen de los productos en infracción a que se refieren los incisos d), f), g) y h) o se comprueben transgresiones a las disposiciones de esta ley, o a sus normas reglamentarias no especificadas en los incisos precedentes, con multas de mil a un millón de pesos (\$ 1.000 a 1.000.000);
- j) En todos los casos, salvo los vinos «enfermos», que puedan corregirse, se hará decomiso de la mercadería;
- k) En los casos de «adulteración, y «aguado y/o manipuleo», el Instituto Nacional de Vitivinicultura impondrá al técnico responsable una inhabilitación de tres a cinco años; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

Toda persona responsable material de adulteración de los productos de la presente ley, será reprimida con prisión de tres a diez años.

Los establecimientos comerciales cuyos propietarios resulten incurso en las penas establecidas para el caso de adulteración, serán clausurados por el término de uno a cinco años. Esta clausura subsistirá aun en el caso de venta del establecimiento.

Se considerarán cómplices principales, pasibles de las penas que para ellos establecen esta ley y el Código Penal, los que provean alcoholes y/o sustancias aptas para la falsificación y adulteración de vinos a los infractores de la presente ley.

Art. 25.—El Instituto Nacional de Vitivinicultura organizará y llevará permanentemente actualizado el registro de infractores; la reincidencia en la infracción será razón fundamental agravante en la determinación de las penalidades a aplicar. En caso de reincidencia en la infracción prevista en los incisos c), d), g) y h) del artículo 24, el Instituto podrá inhabilitar a la firma y a todos o algunos de sus componentes para las actividades vinícolas en forma temporaria o definitiva.

Las acciones y penas emergentes de esta ley prescriben a los cinco años. Los actos de procedimiento administrativo o judicial interrumpen la prescripción.

Art. 26.—Serán responsables de las infracciones a la presente ley y sus reglamentaciones los que en el momento de iniciarse el sumario sean los poseedores o tenedores de la mercadería. La responsabilidad será del vendedor de la mercadería, cuando el consignatario, poseedor o tenedor, antes de recibirla, hubiera solicitado u obtenido la extracción de muestras para el análisis del producto. Los poseedores, tenedores o consignatarios de la mercadería, o en su caso los vendedores, responderán por el hecho de sus factores, agentes o dependientes, en cuanto a las penas pecuniarias, decomiso y gastos.

Art. 27.—Toda persona o empresa en general que transporte los productos a que se refiere esta ley, deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de la misma a objeto de hacer efectiva la fiscalización.

Art. 28.—La violación de los sellos y la alteración de documentos relacionados con la producción y comercio vitivinícolas, harán pasible a los incurso en las responsabilidades previstas por el Código Penal.

Art. 29.—El vino envasado en origen (botellas, damajuanas) podrá ser vendido en el Mercado Nacional con un sobreprecio compensatorio que oportunamente será determinado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Art. 30.—Los funcionarios a cuyo cargo esté el cumplimiento de la presente ley estarán autorizados para penetrar a cualquier hora en los locales, establecimientos o fábricas, y examinar libros y documentos, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los productos a los que él se refiere, al efecto de su contralor en los lugares de producción en tránsito o en el comercio, pudiendo, si fuera necesario, recabar el auxilio de la fuerza pública y solicitar del juez competente órdenes para allanar domicilios, las que deberán despacharse dentro de las veinticuatro horas, habilitando los días y horas que sean necesarios.

Art. 31.—En todos los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas generales obligatorias, el Instituto instruirá el sumario correspondiente.

Si del mismo surgieran presuntas infracciones cuyo juzgamiento no le competa, dará oportuna intervención al organismo que corresponda, debiendo proceder en igual forma las otras reparticiones cuando en principio surjan infracciones a la presente ley. Lo actuado en cualquier repartición se tendrá como elemento de prueba, ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas. Realizada la investigación, se correrá vista por quince días hábiles improrrogables al interesado y, recibida la prueba, se dictará resolución dentro de los ciento ochenta días. Si del sumario surgiera la coexistencia de infracciones a la presente ley o a normas reglamentarias cometidas por una misma persona, originadas en un hecho único, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción, castigada con la pena mayor. En caso contrario, se aplicará la multa correspondiente a cada infracción. El funcionario encargado de instruir el sumario tendrá la facultad de citar y recibir declaraciones de testigos bajo juramento, y de recurrir a las demás medidas probatorias autorizadas por las leyes comunes.

Art. 32.—Cuando la resolución fuese condenatoria, podrá deducirse recurso de apelación por vía contenciosa ante juez competente, hecho que el recurrente pondrá simultáneamente en conocimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo interponerse dicho recurso dentro del término perentorio de cinco días hábiles de notificado, pasados los cuales, si no se recurriese, la resolución se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada y las medidas preventivas acordadas tendrán carácter definitivo.

En los casos en que el Instituto Nacional de Vitivinicultura resuelva la clausura o suspensión de actividades de los establecimientos o locales en infracción a la presente ley o a su reglamentación, a fin de que exista una inmediata ejecución de la sanción aplicada, el recurso de apelación ante el juez competente se concederá al solo efecto devolutivo y en relación.

Cuando no mediare apelación o fuere confirmada por sentencia la multa impuesta, el Instituto podrá hacerla efectiva por vía de apremio.

Art. 33.—Los trámites de la apelación y el juicio de apremio se sustanciarán conforme con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683. Si el infractor fuere reincidente en el mismo tipo de infracción, no se concederá recurso alguno contra las resoluciones que impongan multas por transgresiones a esta ley, si previamente no ha sido ingresado su importe a la tesorería del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Art. 34.—La representación del Instituto Nacional de Vitivinicultura ante todas las jurisdicciones o instancias será ejercida por los procuradores o agentes fiscales o por los funcionarios que designe el Instituto, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados del mismo.

Los procuradores o agentes fiscales o los funcionarios del Instituto que lo representen o patrocinen tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación, y siempre que haya quedado totalmente satisfecha la multa e intereses que pudieran corresponder. Cuando la representación se encuentre a cargo de funcionarios designados por el Instituto, podrá éste fijar la forma de distribución de los honorarios.

Art. 35.—El Instituto Nacional de Vitivinicultura tendrá a su cargo la aplicación de las leyes y regl-

menes reglamentarios en vigor sobre producción, circulación y comercio de vinagres, sidras, zumos fermentados de frutos, hidromeles y cervezas. Las disposiciones de esta ley, en cuanto no se opongan a los respectivos regímenes especiales, serán aplicables a la elaboración, expendio y la circulación de vinagres, sidras, zumos fermentados de frutos e hidromeles y transitoriamente a las cervezas.

Art. 36. — A partir del volumen mínimo que se fije, las elaboraciones de los productos de la presente ley, deberán hacerse bajo el control y la responsabilidad directa y efectiva de un técnico, capacitado por título habilitante en la actividad de que se trata.

Art. 37. — Los poderes públicos nacionales deberán consultar al Instituto Nacional de Vitivinicultura antes de adoptar providencias sobre asuntos que se relacionen con el contralor, la promoción o economía de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas.

Art. 38. — El personal y los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de la actual Dirección de Vinos y otras bebidas serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Decláranse eximidos del requisito de título profesional habilitante exigido por el artículo 9º, inciso h), de la presente ley, a los inspectores de la Dirección de Vinos y otras bebidas actualmente en función.

Art. 39. — Queda derogada la ley 12.372 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 40. — La Dirección General Impositiva mantendrá transitoriamente el contralor de los productos definidos en el artículo 20 que están actualmente a su cargo.

Art. 41. — Esta ley empezará a regir noventa días después de su promulgación, en cuyo lapso el Instituto Nacional de Vitivinicultura proveerá a su estructura definitiva, y el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. En tanto no se dicte la reglamentación, se mantendrán en vigencia las normas actuales que no se opongan a la presente.

Se tomarán de rentas generales los recursos que demande su aplicación mientras no se incluyan en el presupuesto general de la Nación. El Ministerio de Economía anticipará de rentas generales al Instituto Nacional de Vitivinicultura, con carácter de anticipo, y con cargo de oportuna devolución, las sumas necesarias para atender los gastos urgentes e imprescindibles de su funcionamiento hasta tanto se apruebe el presupuesto del nuevo organismo.

Art. 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

—Antes de terminar la lectura del proyecto dice el

Sr. Guido. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Guido. — El texto de la ley de vinos que se está leyendo por Secretaría es suficientemente conocido por los señores senadores. En primer lugar, porque ha sido debatido ampliamente en la Honorable Cámara de Diputados y en segundo término, porque fue considerado extensamente en las reuniones del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente. Además, y

por último, en la banca de cada uno de los distinguidos colegas obra el texto íntegro de la sanción de la otra Cámara.

En consecuencia, propongo que se suprima la lectura y entremos a su discusión, a fin de que se puedan hacer las consideraciones referidas a los aspectos del proyecto, para luego dar los fundamentos de la posición de cada uno de los señores senadores.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pérez). — Habiendo asentimiento no se continuará con la lectura del proyecto.

En consideración.

Sr. Sánchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Sánchez. — El proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, venido en revisión de la Cámara de Diputados, fue girado a las comisiones de Industria, y de Agricultura y Ganadería. Ambas comisiones han estudiado exhaustivamente el problema y realizado gran número de consultas entre los diferentes sectores interesados. Han acopiado muchos antecedentes y material, y formado las carpetas de estudio respectivas, pero no han formulado despacho por encontrarse con una serie de situaciones no coincidentes, distorsionadas, al extremo de que, respecto de los puntos fundamentales, no han podido armonizar criterio ni siquiera dentro de las consultas realizadas entre los señores senadores; por ese motivo, ambas comisiones entendieron que era preferible, y de mejor trámite, traer al seno del recinto la consideración del presente asunto.

La producción vitivinícola, señor presidente, es la tercera industria del país, en cuanto a orden de importancia se refiere, y reclama del Congreso de la Nación una mayor organicidad, un ajustamiento en las resoluciones, al extremo de hacer posible una verdadera represión del fraude, a fin de defender la calidad del vino y la economía de lo que yo llamo el viñedo argentino.

Esta industria, como dije hace un instante, es la tercera en orden de importancia dentro del ámbito del país, y una importante inversión de capitales argentinos se ubican en lo que son los viñedos, las perforaciones para la alimentación de agua o regadío de los mismos, las bodegas, las plantas de fraccionamiento, destilerías y transportes, a efectos de servir a esta industria.

La industria vitivinícola en la República Argentina debe estar en estos momentos avaluada en el orden de los 80 ó 100 mil millones de pesos. Existen en la Argentina 40 mil viñateros y trabajan, solamente, en lo que hace a la elaboración, o sea a la industrialización del pro-

ducto o materia prima y su comercialización, aproximadamente 100 mil obreros. Los viñedos están distribuidos en el país, más o menos en la siguiente proporción: un 71 por ciento corresponde a la provincia de Mendoza; un 24 por ciento a la provincia de San Juan, y el resto fundamentalmente a Río Negro y a las demás provincias vitivinícolas.

La provincia de Mendoza tiene en cultivos productivos aproximadamente 157.000 hectáreas. La provincia de San Juan, 40.000 hectáreas, más 7.000 hectáreas que empezarán a producir desde el próximo año. La provincia de Río Negro, 12.000 hectáreas y el resto, hasta llegar a un total de 227.000 hectáreas, corresponde a las demás provincias vitivinícolas.

La producción en materia prima, referida a esta industria, pertenece aproximadamente en un 62 por ciento a Mendoza; 31 por ciento a San Juan, y 7 por ciento al resto de las provincias vitivinícolas, integrado fundamentalmente —como digo— por la provincia de Río Negro.

Existen en la República unas 2.000 bodegas y el mismo número de plantas de fraccionamiento. El vino es una bebida que podríamos llamar popular, atendiendo a su precio asequible a las clases o grupos sociales de menores posibilidades económicas. A mayor abundamiento, cabe decir que la República Argentina en esta industria es considerada una de las más importantes del mundo.

Muchos errores se han cometido por parte de las organizaciones oficiales que actuaron con antelación; me refiero a las resoluciones tomadas con respecto a esta industria. Quiero recordar solamente el error que significó la creación de la Junta Reguladora de Vinos, ley 12.137 del año 1934. Como consecuencia de esa política, se arrancaron aproximadamente 30.000 hectáreas de viñedos y se derramó el vino —cosa anormal e incomprensible— por las acequias de las provincias vitivinícolas argentinas, principalmente en Mendoza y San Juan.

Otro ordenamiento jurídico, que se refiere a la organización de la industria vitivinícola, y del cual existen recuerdos muy tristes y trágicos, es el que creó la tipificación, la política destiramiento, que se practicó con motivo del decreto reglamentario 7.168, que estableció cuotas para esta industria. En esa forma, personas absolutamente desvinculadas del proceso de producción e industrialización vitivinícolas fueron favorecidas con dichas cuotas, lo que provocó grandes perjuicios para el país y un proceso de corrupción que ha durado hasta hace muy poco tiempo.

La ley que ha venido rigiendo la actividad vitivinícola es la 12.372, del año 1938; esta ley ha llenado su cometido, aun cuando, a pesar de los años transcurridos, no ha sido reglamentada

y tuvo que complementarse con las disposiciones del decreto 4.363. A pesar de tratarse de una ley que puede calificarse como buena, está desactualizada, sobre todo, en lo que se refiere a las penas que deben aplicarse a los que actúan delictivamente en esta industria. Los fraudes se han realizado fundamentalmente en los centros de consumo, pero también, aunque cause dolor expresarlo, en las zonas de producción. A veces estas actividades delictivas llegaron a perjudicar la salud de la población y de suyo a la industria. Situación ésta, contra la cual hay que reaccionar.

El nuevo ordenamiento legal, que crea el Instituto de Vitivinicultura, motivo de este debate, y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, está destinado a fiscalizar y promover la industria vitivinícola. Aprovechando sus grandes posibilidades de futuro, puede pensarse en la exportación de vinos, lo que ha de constituir seguramente una fuente de divisas, que contribuirá, sin lugar a dudas, al desarrollo económico en que todos estamos empeñados.

El proyecto de ley que crea el Instituto de Vitivinicultura, y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, repito, consta de 3 capítulos esenciales que son: el primero, referente a los órganos de aplicación; el segundo, al régimen técnico, y el tercero, sobre procedimientos y penalidades.

El régimen técnico de la vieja ley 12.372 creemos que ha sido bueno, de elevada eficiencia, y es el mismo que existe actualmente en casi todas las legislaciones de los diferentes países vitivinícolas. De manera que en este aspecto solamente se han hecho algunas modificaciones, principalmente teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina Internacional del Vino, a la cual nuestro país se halla adherido.

El proyecto de ley que analizamos, ha introducido reformas sustanciales en el capítulo que se refiere a los organismos de aplicación. Asimismo, respecto del capítulo de procedimientos y penalidades.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura absorbe totalmente la repartición que hoy se conoce como Dirección de Vinos.

El proyecto del diputado Juri, que fuera aprobado por la Cámara de la cual forma parte, organiza el Instituto Nacional de Vitivinicultura a través de un consejo directivo, en el que tienen representación el gobierno nacional, los gobiernos de las provincias vitivinícolas y, asimismo, las organizaciones privadas, que agrupan a los productores e industriales.

De las consultas realizadas y de las opiniones vertidas por muchos señores senadores, han surgido una serie de críticas que se refieren fundamentalmente a la representación. En lo que se refiere a los distribuidores y al sector obrero, entiendo que no corresponde que estén representados, en el consejo directivo del Ins-

tituto Nacional de Vitivinicultura. La fiscalización y las sanciones —los señores senadores deben interpretar que estoy haciendo un ligero análisis de la ley—, se realizan a través del proyecto que discutimos, por la parte que corresponde a la representación estatal. Se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura dentro del criterio jurídico de autarquía técnica funcional y financiera.

Creemos que este organismo, con algunas modificaciones que se han de proponer en esta sesión, ha de tener la agilidad que es fundamental para su mayor eficiencia. Me refiero al personal técnico necesario para cumplir sus funciones, como también a los medios indispensables como automotores y delegaciones que han de posibilitar una mayor agilidad y eficiencia.

La nueva ley es esperada y deseada por los sectores honestos y responsables de la industria; existe un apartado que se refiere a funciones de promoción y orientación en el ánimo de ofrecer mejores posibilidades a la industria. Ese proceso de promoción y orientación comprende la creación de bodegas regionales, de cooperativas, de viveros que hagan posible la obtención de cepas de mayor rendimiento y mejor calidad, así como el otorgamiento de becas, instalación de laboratorios, realización de exposiciones, e incluso la posibilidad de adquisición de vasijas de roble para depositar los caldos que han de quedar en reserva, con el fin de llegar a obtener un producto que, en un momento determinado, haga posible que la industria vitivinícola, pueda salir del país en franca lucha de calidad, dentro de los mercados internacionales.

Los recursos financieros con que ha de funcionar el Instituto Nacional de Vitivinicultura se obtienen a través del artículo 10 inciso a), que establece una sobretasa de 20 centavos por litro de vino; con ella se ha de financiar todo el proceso que cumpla el Instituto.

Para terminar con este aspecto, quiero decir que las sanciones que propone el presente proyecto podríamos clasificarlas en leves y graves.

Las sanciones leves están orientadas a reprimir todas aquellas infracciones de trámite formal y que indiscutiblemente no tienen características delictivas. En cambio, las sanciones graves van dirigidas fundamentalmente al verdadero delincuente, que desgraciadamente ha existido y pienso que existe en alguna medida, dentro del proceso de industrialización del vino.

Para este tipo de delitos, para el fraude, que estamos dispuestos a combatir en todas sus dimensiones, el proyecto de ley establece penas que llegan hasta los dos millones de pesos, más un adicional que en los casos más graves puede ser de hasta diez pesos de multa por cada litro. Además de ello, se impone privación de libertad a aquellos que cometen este tipo de delitos, la que puede llegar incluso al término de diez años.

También se ha previsto una sanción concurrente, que es la clausura del establecimiento industrial hasta el término de cinco años.

Otra de las penalidades que se establecen según el proyecto en discusión, es la de inhabilitación temporaria o definitiva, tanto para los industriales como para el personal técnico que hubiera actuado o tomado parte en la comisión del delito de adulteración del vino.

En la parte que se refiere a los procedimientos, los mismos se llevan a cabo, como dije hace un momento, mediante los representantes del Estado que integran el instituto. Pueden apelarse las sentencias o resoluciones administrativas del Instituto por vía contenciosa y ante juez competente. Se elimina de esta forma en el proyecto de ley la posibilidad de una doble instancia dentro del proceso administrativo.

Como decíamos al principio, la ley crea el cargo de presidente y de un vicepresidente para dirigir este instituto, designados con acuerdo del Senado.

Todo lo expresado hasta este momento se refiere, en grandes rasgos, a los antecedentes correspondientes a la producción e industrialización vitivinícola. Tanto los senadores que pertenecen a las distintas provincias vitivinícolas como los de las restantes hemos tenido una gran preocupación por resolver esta cuestión, tan importante, con un justo criterio de equidad pensando en reprimir el fraude para lograr una mejor calidad.

Pero, a decir verdad, nos hemos encontrado con dos cuestiones seriamente graves, difícilmente armonizables; hemos conversado largas horas y tratado de buscar la solución por todos los caminos, pero nos hemos enfrentado con distorsiones, diríamos así, en dos aspectos esenciales, cuales son la integración del consejo directivo y la residencia del instituto.

Para abordar el primer punto, o sea el que se refiere a la integración del consejo directivo del instituto, pienso que hay que considerar dos o tres criterios, que indudablemente se ajusten a la realidad de lo que es, en todas sus dimensiones, la industria vitivinícola. Con sentido personal, y después de haber estudiado exhaustivamente la cuestión, estimo que para la integración del Instituto Nacional de Vitivinicultura deben tenerse presentes tres criterios fundamentales, que son: primero, ¿qué se entiende por provincia vitivinícola?; segundo, ¿cuál debe ser la representación del Estado en el mencionado instituto?; y tercero, ¿qué representación deben tener la producción y la industria vitivinícola?

Considero que puede llegarse al concepto de provincia vitivinícola a través de dos criterios diferentes. En mi opinión, provincia vitivinícola es aquella que obtiene un importante volumen de producción dentro del volumen total del país; y, por otra parte, provincia vitiviní-

cola debe ser también aquella que, si bien tiene poca producción, dentro del total de producción del país, para ella tiene indudablemente una gran gravitación dentro de su proceso económico interno, o sea, es su principal fuente de recursos, su principal producción, su principal industria.

Pienso, señor presidente, que fundamentalmente son provincias vitivinícolas la de Mendoza en principal grado, porque es la de mayor producción; luego, le siguen, en orden decreciente, San Juan, Río Negro, La Rioja y, en alguna medida, la provincia de Catamarca, las tres primeras por su volumen de producción, y La Rioja porque en ella la industria vitivinícola representa más de las dos terceras partes de su economía. Sostengo con absoluta certeza que para la provincia de La Rioja su industria vitivinícola es tan importante como para las de Mendoza, San Juan y Río Negro. Con ese concepto pretendo manejar el criterio de lo que es una provincia vitivinícola.

El segundo criterio que debe determinarse se refiere al número de representantes del Estado, sea éste nacional o provincial, dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estimo que la representación del Estado nacional y de los Estados provinciales en el instituto debe ser numerosa y tener gran gravitación. Fundo esa posición en la circunstancia de que los representantes del Estado nacional y de los Estados provinciales son funcionarios, en alguna medida hombres políticos, con sensibilidad política. Los representantes de los Estados provinciales han de defender los intereses de sus respectivas provincias en cuanto a la industria vitivinícola se refiere, pero sin lugar a dudas antes habrán de actuar en defensa de los intereses generales de la República.

Considero que los representantes del Estado Nacional y de los Estados provinciales, en determinado momento, habrán de ser los reguladores del interés nacional en beneficio general del país, frente a la industria vitivinícola; sobre todo, porque debe tratarse de funcionarios con sensibilidad propia, de hombres preocupados por la solución de los grandes problemas del país y no por las pequeñas disputas lugareñas.

El tercer criterio que propugnamos para integrar el consejo directivo es la representación de la producción y de la industria vitivinícola. Creo que esa representación también debe ser importante, tiene que ser numerosa y debe tener su fuerza dentro del consejo directivo del Instituto. Son los productores y los industriales, quienes necesariamente están en la cosa diaria, que hace a la materia prima, a la producción, a la elaboración, conservación, etcétera. En consecuencia, señor presidente, cómo no hemos de dar una importante representación al sector que en su conjunto, producción e indus-

tria, es lo que hace todo el proceso que en términos generales denominamos producción e industria vitivinícola.

Creo que estos sectores, como sectores directamente interesados de la industria, necesariamente deben tener una representación, tal como nosotros hemos pretendido definirlas. Teniendo en cuenta lo que es provincia vitivinícola por una parte, y al Estado nacional y a los Estados provinciales, por otra, y luego a la producción e industria, nosotros pensamos que el consejo directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura debe integrarse de la siguiente forma: un representante del Poder Ejecutivo Nacional, que a su vez cumpla las funciones de presidente y de director general; un representante por la provincia de Mendoza; uno por la provincia de San Juan; uno por la provincia de Río Negro; uno por las provincias de La Rioja y Catamarca; uno por los gobiernos de las demás provincias vitivinícolas; uno por los industriales de Mendoza y otro por los viñateros de la misma provincia; uno por los industriales de San Juan y otro por los viñateros de la misma provincia; uno por los industriales y viñateros de Río Negro y un representante por las cooperativas vitivinícolas.

Estimo, señor presidente, que integrando de esta forma el consejo directivo, hemos logrado dos equilibrios que en muy pocas palabras trataré de analizar. El primero consiste en una representación casi equivalente entre el Estado nacional y los Estados provinciales, por una parte, y la representación de los productores e industriales, por la otra.

Creemos lograr un segundo equilibrio, entre los sectores industriales y los productores, aunque hemos dado mayor preponderancia —muy leve— al sector de la producción, o sea al de los viñateros, porque entendemos que éstos son los auténticos y verdaderos pioneers, los más sacrificados de la actividad vitivinícola. El viñatero, salvo raras excepciones, es el hombre que está afincado a la tierra, que vive sus emociones, que trabaja día a día, año a año, que con su sacrificio elabora la grandeza del país, dentro de la actividad que nos ocupa.

Quiero decir, respondiendo a un deber de lealtad, que en la composición de este organismo, de este Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, hay indiscutiblemente una mayor representación de las provincias más productivas, o sea las de Mendoza y San Juan. Creo, señor presidente, que debe ser así. Un concepto mínimo de justicia debe necesariamente inclinarnos por este criterio. Entiendo que estas dos provincias concentran la mayor producción de esta industria. Por eso deben tener una mayor representación. La provincia de La Rioja también debe estar representada, a pesar de su reducida producción, dado que tiene una estructura eco-

nómica en la que la industria vitivinícola representa dos tercios de su actividad total, es decir, que la industria vitivinícola es tan importante para ella como lo es para Mendoza, San Juan o Río Negro.

Distinta es la situación de otras provincias. En algunas recién comienza esta actividad, y en otras, aunque la industria está establecida desde hace mucho tiempo, no tiene ninguna significación para las mismas, desde el punto de vista de su economía. La provincia de Córdoba, por ejemplo, tiene algunos viñedos, y más aún la provincia de Buenos Aires, cuyas plantaciones exceden las 2.000 hectáreas. Pero aún así, esta industria en Córdoba no representa ni el uno por ciento de su actividad económica total; lo mismo para la provincia de Buenos Aires. Además, para ellas se trata de una industria marginal, a pesar de los viñedos antes mencionados.

Por estas razones, creo y sostengo que el Consejo Nacional de Vitivinicultura debe estar integrado como lo proponemos, o sea con participación de las provincias vitivinícolas, del Estado Nacional y de los Estados provinciales, y de los intereses particulares, productores e industriales.

No voy a repetir conceptos que son conocidos por los señores senadores, como aquel que se refiere, por ejemplo, al drama macrocefálico de la República: la Capital y el Gran Buenos Aires. No vamos a repetir el proceso centralista y desfigurativo del sistema federal, que es la realidad económica de la República. No vamos a referirnos al vértice de angustia de la República, que es el puerto de Buenos Aires, al que convergen todos sus caminos y redes de transporte, olvidando al interior. Simplemente quiero decir, señor presidente, que siempre es oportuno empezar a descentralizar el país; hagámoslo ahora —en alguna medida— a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, como ya lo hemos hecho llevando juntas o institutos, como el del té o el del algodón, a las provincias productoras. Consecuente con lo manifestado, creo, señor presidente, que la residencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura debe estar, por una razón natural de lógica, en la zona de mayor producción, que por el momento es la de Cuyo. Es sumamente importante que así ocurra, por razones lógicas, que no vamos a entrar a explicar, de viabilidad, administrativas, etcétera.

Se afirma que el instituto debe tener su asiento en la Capital Federal por razones de transporte, de mayor comodidad, de mayor accesibilidad, de mayor vinculación en el trámite administrativo, entre él y otras reparticiones conexas con las cuales necesariamente tendrá en algunas oportunidades que vincularse, dado que el 99 por ciento del proceso —diríamos así— administrativo del país se encuentra localizado en la capital de la República. Deseo responder a ese criterio de comodidad afirmando que no es exac-

to que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura va a tener mayores posibilidades si está ubicado en la Capital. El instituto deberá tener delegaciones en cada una de las provincias productoras y en los centros de consumo. Así como la actual Dirección de Vinos tiene delegaciones en cada una de las zonas vitivinícolas, también el Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá organizarse con sus oficinas pertinentes.

Como es lógico suponer, donde se radique el Instituto Nacional de Vitivinicultura solamente se han de realizar las tramitaciones de última instancia, para la decisión final de los casos planteados. Todas las otras, o sean las simples tramitaciones administrativas, se han de resolver en las delegaciones. Solamente han de llegar al asiento del instituto los casos de gran complicación o de última instancia en los procesos administrativos, que indudablemente serán pocos. Si fuera necesario viajar al interior del país en casos excepcionales para hacer una diligencia, es sumamente justo que ello ocurra, sobre todo porque los hombres del interior estamos acostumbrados a viajar siempre y por todos los asuntos a la Capital Federal, para recurrir a los organismos centrales.

El tercer aspecto, para mí de fundamental importancia, es el que se refiere a lo que se ha dado en llamar los vinos regionales. De acuerdo con la información que poseo en base al asesoramiento que he podido obtener, vino regional es el producido en algunas zonas del país con uvas de la región, de características especiales, que exige un tratamiento también especial. Se trata de zonas de escasa producción. El vino regional está considerado por los técnicos como superior al vino común y como inferior a los vinos finos, tipo reserva, que se elaboran en la zona de Cuyo, por ejemplo. Se trata de zonas que no pueden entrar, incluso, en el aspecto competitivo, sobre todo en cuanto se refiere a las posibilidades del comercio exterior.

Por esa razón, entiendo que la ley debe considerar especialmente la situación particular que presentan los vinos regionales. La redacción que propuso el diputado nacional por Catamarca, doctor Correa, al discutirse en la Cámara joven este aspecto de la cuestión, decía así: «Defínese como vino regional el vino genuino elaborado en las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta, libre de cortes o mezclas con vinos de otras procedencias y siempre que en su elaboración se emplee exclusivamente uva producida dentro de la jurisdicción provincial respectiva. Tales vinos se expendrán con la denominación de «Vinos regionales de...», seguido del nombre de la provincia productora. A los efectos impositivos, estos vinos tributarán el impuesto que rijan para los vinos comunes.

Al incluir este aspecto en la ley se entiende, sin lugar a dudas, que el criterio a tenerse en cuenta es el que establece que los impuestos han de ser los que corresponden a los vinos comunes y que el precio —por tratarse de un producto superior— podrá ser más alto que el de los vinos comunes.

Deseo terminar mi exposición manifestando que oportunamente propondré una serie de modificaciones que considero deben introducirse en este proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, modificaciones éstas que son de orden formal, ya que en los demás aspectos habría criterio uniforme.

Propondremos a través de la discusión en particular que las actuaciones del instituto —frente a un fraude— se hagan conocer al juez en lo criminal pertinente. Asimismo, voy a proponer una participación de un 25 % de las multas para el personal de la delegación que haya descubierto el fraude. A este respecto, se han hecho innumerables consideraciones en el terreno de la doctrina. La eficiencia de los inspectores y funcionarios es superior cuando existe participación.

Existe experiencia en el ámbito de los impuestos internos que demuestra que cuando había participación de las multas por parte de los inspectores, realmente se efectuaba una auténtica fiscalización y percepción de dichos impuestos. En cambio, actualmente, los impuestos internos y a los réditos, en enorme proporción, son evadidos. Su fiscalización no se realiza en la forma debida, por cuanto el inspector no está interesado en poner toda su eficiencia en el descubrimiento de estos casos de evasión.

Deseo expresar también que tenemos redactado el texto de un apartado que establezca la solución de un problema que a la provincia de San Juan la está perjudicando enormemente. Por razones de orden ecológico los vinos de San Juan tienen mayor graduación alcohólica que los de las provincias de Mendoza, Río Negro, Buenos Aires y otras. Por ello se ha exigido a los vinos de mi provincia una mayor graduación alcohólica que a los del resto de las provincias vitivinícolas. A San Juan se le fijan 12,8 grados y a Mendoza 12,3, para los vinos comunes.

No voy a defender, señor presidente, desde ningún punto de vista, que se exija la misma graduación alcohólica, porque ello significaría en alguna medida el agumiento o el estiramiento de los vinos de San Juan; pero sí he de pedir a este Senado que dé una solución al problema, porque los vinos de San Juan, al contener mayor graduación alcohólica, han desaparecido del mercado o de los centros de consumo. Un fraccionador de vinos de traslado compra vinos de las diferentes zonas vitivinícolas y, al mismo tiempo, vinos de San Juan. Pero una vez que los ha comprado realiza los cortes pertinentes y luego no ha vendido...

Sr. Cañeque. — ¿Me permite, señor senador?

Este asunto ya lo hemos discutido en otra oportunidad. En ese entonces yo sostuve que las diferencias de los distintos tipos de vinos estaban dadas en función del precio. Es decir, a una diferenciación cualitativa corresponde una diferencia en el orden de los precios. Pero era una época en que existían precios topes para el vino, cosa que ha desaparecido en la actualidad. En consecuencia, la única solución que podría tener la diferencia de graduación alcohólica que preocupa excesivamente al señor senador por San Juan, consistiría lisa y llanamente en prohibir los cortes de vinos de distintas regiones; quiere decir que el vino de Mendoza se vendería en el mercado como tal y no podrían realizarse cortes con vinos de otras procedencias. Igual cosa ocurriría con los otros productos del país.

Entiendo que sería ir muy lejos con una legislación que no posibilitara la realización de cortes, porque dentro de la técnica enológica se da el caso de que los mejores vinos no son los que pertenecen exclusivamente a una sola rama, vale decir que no se cierra el ciclo agroindustrial en función de un determinado tipo de cepa, sino que, por el contrario, se da el caso —y conozco lo que sucede con los mejores vinos de Mendoza— en que el propio bodeguero, para lograr una determinada tipificación, se ve en la obligación inexcusable de realizar cortes. El corte está, pues, en definitiva, en la cúspide de la mejor técnica enológica; de manera, entonces, que considero un tanto peregrina la idea de pretender que un vino deba necesariamente valer más o tener cualquier tipo de calificación en función de su graduación alcohólica.

Deseo hacerle notar al señor senador que sin ser técnico en la materia, entiendo que no son mejores vinos los que poseen una mayor graduación alcohólica, sino que debe darse un equilibrio orgánico, en cierto modo, analítico o químico, organoléptico, para obtener un producto que se imponga por un conjunto de cualidades que hagan de él un excelente producto. El vino francés de Borgoña no es de gran calidad por el hecho de tener determinada graduación alcohólica, sino que lo es por poseer una determinada cantidad de extracto seco y otra de alcohol, aspectos estos dos que, reunidos en forma equilibrada, lo hacen un vino de reputación universal.

En consecuencia, no podemos insistir en la graduación alcohólica. Es cierto que los vinos de San Juan tienen más alcohol que los de Mendoza, pero modestamente pienso que estos últimos son mejores que los de San Juan. Es claro que soy mendocino. (*Risas.*)

Sr. Presidente (Pérez). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: no me debo haber expresado bien, o el señor senador

no me comprende. Voy a tratar de ser un poco más explícito. Conozco, sin ser tampoco técnico en la materia, señor senador, que la graduación alcohólica no determina por sí sola la calidad de los vinos. La graduación alcohólica tiene importancia dentro de la calidad de los vinos; pero también para lograr calidad, indudablemente concurren otras propiedades, organolépticas, extractos secos, etcétera.

Señor senador: yo no planteo el caso de acuerdo con la réplica que usted ha producido; he dicho lo siguiente: a los vinos de San Juan, por razones ecológicas, de tierras, clima, etcétera, se les exige una mayor graduación alcohólica, porque las uvas de San Juan producen una mayor cantidad de azúcar.

Sr. Cañequé. — Eso lo hemos discutido y hemos llegado a la conclusión...

Sr. Sánchez. — Excúseme un minuto y vamos a estar de acuerdo.

Sr. Presidente (Pérez). — Ruego al señor senador por San Juan que se dirija a la Presidencia.

Sr. Sánchez. — Estoy tratando de aclararle al señor senador por Mendoza...

Sr. Presidente (Pérez). — Le ruego que se dirija a la Presidencia.

Sr. Sánchez. — Repito, señor presidente: a los vinos comunes de San Juan, por razones de orden ecológico, se les exige 12º,80; a los vinos de Mendoza, se les exige 12º,30. Es decir, que hay una diferencia de medio grado.

Señor senador por Mendoza: no estoy de acuerdo, desde ningún punto de vista, en que a San Juan se le exija menor graduación; no, debe exigírsele la misma que se le exige ahora. Aquí es donde tiene que entenderme bien el señor senador por Mendoza: el bodeguero de traslado o el fraccionador de Buenos Aires compra vino de San Juan, que tiene mayor graduación. A ese vino se le corta con vinos de menor graduación de otras zonas, y se lo vende siempre como vino de otras zonas, y nunca como vino de San Juan. ¿Por qué, señor presidente? Porque el bodeguero de traslado o el fraccionador, en este caso, si lo vende como vino de San Juan tiene que sacarlo al mercado con 12º,80; si lo vende como vino de Mendoza tiene que sacarlo con 12º,30, es decir, puede adulterar agregando agua hasta rebajar medio grado, y si lo vende como vino de San Nicolás, tiene que sacarlo con una graduación muy inferior, que le permite agregar agua para rebajar desde 12º,80 hasta 11º, que es la exigencia, creo, para San Nicolás.

Por eso es muy apetecible el vino de San Juan para los fraccionadores, sobre todo los fraudulentos, porque les permite estirarlos o aguarlos y obtener un mayor volumen, que es, en definitiva, una mayor ganancia.

No propongo, desde ningún punto de vista, que se exija menor graduación, ni que se impida cortar los vinos de San Juan; pero sí, señor presidente, que en esta ley instauremos una cláusula que impida que los fraccionadores o bodegueros, que compran vino común de San Juan, con 12º,80, puedan venderlo como vino de Mendoza a 12º,30 o como vino de San Nicolás a 11º. De no agregarse el artículo que proponemos, se seguirá aguando o estirando el vino de San Juan por los fraccionadores. El vino de San Juan prácticamente ha desaparecido del mercado, y se debe a que se vende como de otras procedencias, para poder estirarlo.

Defiendo un propósito honesto y profundamente legítimo de mi provincia.

Sr. Cañequé. — Volvemos a lo mismo, señor senador. Pero yo creo que he sido demasiado claro; porque con el mismo planteo que usted hace le podría decir, por ejemplo, que hay vinos de Mendoza por los que se paga incluso un precio diferencial, porque son vinos sumamente tintos, que permiten un estiramiento con vinos de San Juan, y sin embargo el vino de San Juan es más económico, porque por vía artificial, como el señor senador lo sabe, es muy fácil la alcoholicación, pero no es tan sencillo lograr un zumo, un tipo de vino que sea lo suficientemente tinto como para permitir duplicar el volumen manteniendo una tipificación que sea agradable al consumidor del Gran Buenos Aires.

Es decir, que yo creo que eso es achicar un poco el problema y reducirlo a una cuestión de mezclas, pues, en la medida en que la ley lo permite, no tenemos por qué entrar en una diferenciación que debe establecerse por vía de precios. Si el señor senador admite que la calidad del vino está dada por un conjunto de elementos de orden químico, donde el grado alcohólico juega de determinada manera, no debe pretender encerrar el vino de San Juan dentro de límites que no permitan su corte con otros vinos, porque tengo la absoluta seguridad de que con ese constreñimiento, con esa forma de enmarcar el problema, no permitiendo que se hagan determinados tipos de corte, la única que va a perder, en definitiva, es la provincia de San Juan.

Concretamente, ¿usted cree que no debe permitirse el corte de dos tipos de vinos tintos?

Sr. Sánchez. — No; yo digo que debe permitirse el corte...

Sr. Bayol. — Le rogaría a la Presidencia que pida a los señores senadores que no dialoguen, porque vamos a amanecer discutiendo este asunto.

Sr. Arana. — Ya hemos amanecido.

Sr. Presidente (Pérez). — Ruego a los señores senadores que se dirijan a la Presidencia y no dialoguen.

Sr. Sánchez. — Voy a terminar, señor presidente. Pero no puedo dejar de pronunciar dos palabras más, con respecto a las manifestacio-

nes del señor senador Cañequé, porque él, está interesado, como yo, en que la situación quede completamente aclarada. Estoy de acuerdo, repito, con los cortes, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que a los vinos de San Juan se los venda como de otra procedencia, para echarles agua y obtener mayor ganancia. Y tengo la solución, señor senador Cañequé, que es la siguiente: en todo vino, de cualquier procedencia que sea, con una graduación alcohólica determinada, combinado y cortado con otro vino de otra zona, de otra graduación alcohólica, puede químicamente ser determinada la resultante alcohólica o sea la graduación alcohólica del corte. En consecuencia, la solución podría ser que se estableciera la proporción de los cortes y así vamos a saber el desiderátum de las graduaciones alcohólicas, de los diferentes tipos de vino que se vendan.

Continúo, señor presidente, y el señor senador Cañequé me podrá contestar más adelante, si cree que estoy equivocado.

Sr. Cañequé. — Por supuesto que está equivocado.

Sr. Sánchez. — Puede estar equivocado usted, no lo creo infalible.

Otra de las proposiciones que vamos a hacer durante el debate en particular, es que los representantes de las provincias vitivinícolas, en caso de aceptarse el temperamento que sostengo para la integración del Consejo Directivo del Instituto, tengan el acuerdo de sus respectivas Legislaturas provinciales. Este temperamento lo he propuesto desde el principio, desde que se discutió en la provincia de San Juan el problema, durante la última reunión de gobernadores. También, señor presidente, estimo, como lo dije a través de mi exposición, que es necesario que la industria, por tener posibilidades reales, trate de avanzar hacia los mercados del exterior. Entiendo que por esta ley debe concederse algún privilegio, en forma de prendas u otro similar, para que un determinado porcentaje de la producción de vinos se estacione y pueda salir al exterior en condiciones competitivas.

En el debate en particular propondremos otras modificaciones. Para terminar, debo decir que este aspecto de la economía nacional, que es la industria vitivinícola, tiene que resolverse a

través de una legislación de acierto. De así ocurrir vamos a obtener un gran beneficio para el país, en el orden interno y también en lo que se refiere al comercio exterior. Si tenemos fe y acertamos, habrá divisas con las que contribuiremos a impulsar el proceso de desarrollo nacional en que estamos empeñados todos los argentinos. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Melani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Melani. — Considerando lo avanzado de la hora, propongo que se cierre la conferencia y la prosigamos en la próxima sesión ordinaria del cuerpo.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Pérez). — Habiendo sido suficientemente apoyada la indicación del señor senador por Córdoba, se declara cerrada la conferencia, para proseguirla en la próxima sesión ordinaria que celebre el cuerpo.

21

MOCION

Sr. Presidente (Pérez). — Continúa la sesión.

Sr. Guido. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Guido. — Completando la indicación del señor senador por Córdoba, hago moción para que se levante la sesión.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Pérez). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Río Negro.

Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pérez). — Queda levantada la sesión.

—Es la hora 1 y 25 del día 11.

ENRIQUE DILLON.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.